

NOTA DE TRANSMISIÓN

del: Praesidium
a la: Convención

Asunto: Artículos sobre el Tribunal de Justicia y el Tribunal de Gran Instancia

1. Se adjuntan, para conocimiento de los miembros de la Convención, los proyectos de artículos de la Parte II relativos al Tribunal de Justicia, acompañados de notas explicativas. El proyecto de artículo 20 de la Parte I de la Constitución, que ya fue transmitido a la Convención (documento CONV 691/03), se incluye también en el presente documento.
2. La elaboración de los nuevos artículos se basa en los trabajos del Círculo de debate sobre el Tribunal de Justicia, presidido por el Sr. Vitorino (las modificaciones respecto del texto actual se indican en **negrita**).
3. Se llama la atención de los miembros de la Convención sobre las siguientes modificaciones propuestas por el Praesidium:
 - ◆ la mayoría cualificada y el procedimiento legislativo en lo relativo a las disposiciones sobre las que actualmente el Consejo actúa por unanimidad, que son los artículos 225 A (creación de tribunales especializados), 229 A (creación de un tribunal especializado en materia de protección de derechos de propiedad industrial) y 245 (Estatuto del Tribunal de Justicia).

- ◆ Modificación de las condiciones de admisibilidad de los recursos de anulación presentados por personas físicas o jurídicas contra actos reglamentarios (párrafo cuarto del artículo 230).
 - ◆ Creación de un comité consultivo que deberá dictaminar sobre la idoneidad de las candidaturas a los cargos de jueces y abogados generales del Tribunal y del Tribunal de Gran Instancia (artículo 224 bis).
 - ◆ Mejora del sistema de sanciones, consistente en una simplificación del procedimiento preliminar en el que la Comisión somete el asunto al Tribunal de Justicia (artículo 228).
 - ◆ Inclusión de la posibilidad de impugnar los actos (artículo 230) u omisiones (artículo 232) de las "agencias y organismos de la Unión".
-

Cuadro indicativo: Artículos propuestos sobre el Tribunal de Justicia y el Tribunal de Gran Instancia en relación con los Tratados actuales

	Nuevos artículos	Artículos que recogen las disposiciones de los Tratados actuales, pero de forma parcial o con modificaciones importantes	Artículos tomados de los Tratados actuales, con ligeras modificaciones o sin cambios
PARTE I			
<u>Artículo 20</u> : El Tribunal de Justicia de la Unión Europea	✓		
PARTE II: EL TRIBUNAL DE JUSTICIA			
<u>Artículo 221</u> :			✓
<u>Artículo 222</u>			✓
<u>Artículo 223</u>		✓	
<u>Artículo 224</u> <u>Artículo 224 bis</u>	✓	✓	
<u>Artículo 225</u> <u>Artículo 225 A</u>		✓	✓
<u>Artículo 226</u>			✓
<u>Artículo 227</u>			✓
<u>Artículo 228</u>		✓	
<u>Artículo 229</u> <u>Artículo 229 A</u>		✓	✓
<u>Artículo 230</u> <u>Artículo 230 bis</u>	✓	✓	
<u>Artículo 231</u>			✓
<u>Artículo 232</u>		✓	

<u>Artículo 233</u>		✓	
<u>Artículo 234</u>		✓	
<u>Artículo 235</u>			✓
<u>Artículo 236</u>			✓
<u>Artículo 237</u>			✓
<u>Artículo 238</u>			✓
<u>Artículo 239</u>			✓
<u>Artículo 240</u>	✓		✓
<u>Artículo 240 bis</u>			
<u>Artículo 240 ter</u>		✓	
<u>Artículo 240 quater</u>		✓	
<u>Artículo 241</u>			✓
<u>Artículo 242</u>			✓
<u>Artículo 243</u>			✓
<u>Artículo 244</u>			✓
<u>Artículo 245</u>		✓	

ARTÍCULOS SOBRE EL TRIBUNAL DE JUSTICIA Y EL TRIBUNAL DE INSTANCIA

PARTE I

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA

Artículo 20

Artículo 20: El Tribunal de Justicia de la Unión Europea

1. El Tribunal de Justicia, incluido el Tribunal de Gran Instancia, garantizará el respeto del Derecho en la interpretación y aplicación de la Constitución y del Derecho de la Unión.

Los Estados miembros establecerán las vías de recurso necesarias para garantizar la tutela judicial efectiva en el ámbito del Derecho de la Unión.

2. El Tribunal de Justicia estará compuesto por un juez por Estado miembro y estará asistido por abogados generales. El Tribunal de Gran Instancia contará con al menos un juez por Estado miembro; el número de jueces se determinará en el Estatuto del Tribunal de Justicia. Los jueces del Tribunal de Justicia y del Tribunal de Gran Instancia y los abogados generales del Tribunal de Justicia, elegidos entre personalidades que ofrezcan absolutas garantías de independencia y que reúnan las condiciones requeridas en el artículo [XX] de la Parte II, serán designados de común acuerdo por los Gobiernos de los Estados miembros por un mandato de seis años. Los miembros salientes podrán ser nuevamente designados.

3. El Tribunal de Justicia será competente para:

- pronunciarse sobre los recursos interpuestos por la Comisión, por un Estado miembro, por una institución o por personas físicas o jurídicas en los casos previstos en **los** artículos [YY] de la Parte II y en las condiciones que en ellos se establecen;
- pronunciarse con carácter prejudicial, a petición de órganos jurisdiccionales nacionales, sobre la interpretación del Derecho de la Unión o sobre la validez de los actos adoptados por las instituciones;

- pronunciarse sobre los recursos de casación contra resoluciones dictadas por el Tribunal de Gran Instancia, o con carácter excepcional, para examinar dichas resoluciones, en las condiciones fijadas en el Estatuto del Tribunal de Justicia.

PARTE II

Artículo 221

El Tribunal de Justicia actuará en Salas, en Gran Sala o en Pleno, de conformidad con las normas establecidas al respecto en el Estatuto del Tribunal de Justicia.

Comentario

Texto de los párrafos segundo y tercero del artículo 221, aunque fusionados en un párrafo único. El párrafo primero ("El Tribunal de Justicia estará compuesto por un juez por Estado miembro") figura en el artículo 20 de la Parte I.

Artículo 222

(artículo actual: sin modificación)

El Tribunal de Justicia estará asistido por ocho abogados generales. Si el Tribunal de Justicia lo solicitare, el Consejo, por unanimidad, podrá aumentar el número de abogados generales.

La función del abogado general consistirá en presentar públicamente, con toda imparcialidad e independencia, conclusiones motivadas sobre los asuntos que, de conformidad con el Estatuto del Tribunal de Justicia, requieran su intervención.

Comentario

Artículo sin modificación.

Artículo 223

Los jueces y los abogados generales del Tribunal de Justicia, elegidos entre personalidades que ofrezcan absolutas garantías de independencia y que reúnan las condiciones requeridas para el ejercicio, en sus respectivos países, de las más altas funciones jurisdiccionales o que sean jurisconsultos de reconocida competencia, serán designados de común acuerdo por los gobiernos de los Estados miembros, **previa consulta del comité previsto en el artículo 224 bis**.

Cada tres años tendrá lugar una renovación parcial de los jueces y abogados generales, en las condiciones establecidas en el Estatuto del Tribunal de Justicia ¹.

Los jueces elegirán de entre ellos al Presidente del Tribunal de Justicia por un período de tres años. Su mandato será renovable.

El Tribunal de Justicia establecerá su reglamento de procedimiento. Dicho reglamento requerirá la aprobación del Consejo por mayoría cualificada.

Comentario

Este artículo recoge el actual artículo 223 del TCE, a excepción de la referencia a la duración del mandato, que se encuentra actualmente en el artículo 20 de la Parte I, y del presente cuarto párrafo, sobre el nombramiento del secretario, que podría incorporarse al Estatuto del Tribunal de Justicia (nuevo artículo 9 del Estatuto).

Artículo 224

El número de jueces del Tribunal de Gran Instancia será fijado por el Estatuto del Tribunal de Justicia. El Estatuto podrá disponer que el Tribunal esté asistido por abogados generales.

¹ Esta disposición está en función de la duración del mandato; si el Praesidium optase por un mandato no renovable, se suprimiría.

Los miembros del Tribunal de Gran Instancia serán elegidos entre personas que ofrezcan absolutas garantías de independencia y que posean la capacidad necesaria para el ejercicio de altas funciones jurisdiccionales. Serán designados de común acuerdo por los gobiernos de los Estados miembros por un período de seis años, **previa consulta al comité previsto en el artículo 224 bis**. Cada tres años tendrá lugar una renovación parcial del Tribunal de Gran Instancia. Los miembros salientes podrán ser nuevamente designados.

Los jueces elegirán de entre ellos al Presidente del Tribunal de Gran Instancia por un período de tres años. Su mandato será renovable.

El Tribunal de Gran Instancia adoptará su reglamento de procedimiento de acuerdo con el Tribunal de Justicia. Decidirá previa aprobación del Consejo por mayoría cualificada.

Salvo disposición en contrario del Estatuto del Tribunal de Justicia, las disposiciones de la Constitución relativas al Tribunal de Justicia serán aplicables al Tribunal de Gran Instancia.

Comentario

El presente artículo se basa ampliamente en el actual artículo 224, menos la primera frase del texto actual ("El Tribunal de Primera Instancia contará con al menos un juez por Estado miembro") y la segunda frase ("El número de jueces será fijado por el Estatuto del Tribunal de Justicia") sobre el procedimiento de nombramiento de los jueces, que figuran en el artículo 20 de la Parte I. En cuanto al resto, podría seguirse el mismo enfoque que para el artículo 223 sobre el nombramiento del secretario.

Artículo 224 bis

Se constituye un comité para dictaminar sobre la idoneidad de los candidatos para el ejercicio de las funciones de juez y abogado general del Tribunal de Justicia y del Tribunal de Gran Instancia, antes de la decisión de los gobiernos de los Estados miembros con arreglo a los artículos 223 y 224.

El comité estará compuesto por siete personalidades elegidas entre antiguos miembros del Tribunal de Justicia y del Tribunal de Gran Instancia, miembros de los órganos jurisdiccionales nacionales superiores y juristas de reconocida competencia, uno de los cuales será propuesto por el Parlamento Europeo. El Consejo decidirá por mayoría cualificada, a propuesta del Presidente del Tribunal de Justicia, la designación de los miembros de dicho comité y sus normas de funcionamiento.

Comentario

Este párrafo contiene una novedad respecto a la situación existente. En efecto, el Círculo de debate consideró "conveniente que se creara un "comité consultivo", cuya función sería la de proporcionar a los Estados miembros un dictamen sobre la idoneidad del perfil de un candidato para el ejercicio de sus funciones, basándose en particular en criterios objetivos relativos a su cualificación profesional. Podrían participar en dicho comité, cuyas deliberaciones no serían públicas y que no efectuaría audiciones, ex miembros del Tribunal y representantes de las instancias supremas nacionales, pudiendo también el Parlamento Europeo designar a un experto jurídico. No obstante, un miembro declaró estar en contra de la idea de asociar al Parlamento Europeo por considerar que ello entrañaría un riesgo de politización del procedimiento de designación. El Círculo ha destacado que la instauración de ese comité consultivo podría reforzar el nivel de exigencia de los Estados miembros en la presentación de los candidatos." (Informe final del Círculo de debate, apartado 6).

Sobre la base de estas indicaciones, el proyecto de artículo prevé la creación de este comité consultivo. Se propone que esté compuesto por siete personalidades. Para facilitar la toma de decisiones, el Consejo debería decidir por mayoría cualificada, tanto respecto del acto por el que se establezca el funcionamiento del comité como sobre la designación de sus miembros. Por último, parece conveniente que el Tribunal de Justicia esté asociado a la institución de este mecanismo de consulta; a tal efecto, se sugiere que el Consejo decida a propuesta del Presidente del Tribunal de Justicia.

Artículo 225
(Artículo actual: sin modificación)

1. El Tribunal de Gran Instancia será competente para conocer en primera instancia de los recursos contemplados en los [artículos 230, 232, 235, 236 y 238], con excepción de los que se atribuyan a un tribunal especializado y de los que el Estatuto reserve al Tribunal de Justicia. El Estatuto podrá establecer que el Tribunal de Gran Instancia sea competente en otras categorías de recursos.

Contra las resoluciones dictadas por el Tribunal de Gran Instancia en virtud del presente apartado podrá interponerse recurso de casación ante el Tribunal de Justicia limitado a las cuestiones de Derecho, en las condiciones y dentro de los límites fijados en el Estatuto.

2. El Tribunal de Gran Instancia será competente para conocer de los recursos que se interpongan contra las resoluciones de los tribunales especializados creados en aplicación del artículo 225 A.

Las resoluciones dictadas por el Tribunal de Gran Instancia en virtud del presente apartado podrán ser reexaminadas con carácter excepcional por el Tribunal de Justicia, en las condiciones y dentro de los límites fijados en el Estatuto, en caso de riesgo grave de que se vulnere la unidad o la coherencia del Derecho de la Unión.

3. El Tribunal de Gran Instancia será competente para conocer de las cuestiones prejudiciales, planteadas en virtud del artículo 234, en materias específicas determinadas por el Estatuto.

Cuando el Tribunal de Gran Instancia considere que el asunto requiere una resolución de principio que pueda afectar a la unidad o a la coherencia del Derecho de la Unión, podrá remitir el asunto ante el Tribunal de Justicia para que éste resuelva.

Las resoluciones dictadas por el Tribunal de Gran Instancia sobre cuestiones prejudiciales podrán ser reexaminadas con carácter excepcional por el Tribunal de Justicia, en las condiciones y dentro de los límites fijados en el Estatuto, en caso de riesgo grave de que se vulnere la unidad o la coherencia del Derecho de la Unión.

1. **El Parlamento Europeo y el Consejo podrán adoptar, por el procedimiento legislativo, leyes europeas** por las que se creen tribunales especializados adjuntos al Tribunal de Gran Instancia, encargados de conocer en primera instancia de determinadas categorías de recursos interpuestos en materias específicas. Decidirán, bien a propuesta de la Comisión previa consulta al Tribunal de Justicia, bien a instancia del Tribunal de Justicia previa consulta a la Comisión.
2. La ley europea por la que se cree un tribunal especializado fijará las normas relativas a la composición de dicho tribunal y precisará el alcance de las competencias que se le atribuyan.
3. Contra las resoluciones dictadas por los tribunales especializados podrá interponerse ante el Tribunal de Gran Instancia recurso de casación limitado a las cuestiones de Derecho o, cuando la ley europea por la que se cree un tribunal especializado así lo contemple, recurso de apelación referente también a las cuestiones de hecho.
4. Los miembros de los tribunales especializados serán elegidos entre personas que ofrezcan absolutas garantías de independencia y que posean la capacidad necesaria para el ejercicio de funciones jurisdiccionales. Serán designados por el Consejo por unanimidad.
5. Los tribunales especializados adoptarán su reglamento de procedimiento de acuerdo con el Tribunal de Justicia. Decidirán previa aprobación del Consejo por mayoría cualificada.
6. Salvo disposición en contrario de la ley europea por la que se cree el tribunal especializado, las disposiciones de la Constitución relativas al Tribunal de Justicia y las disposiciones del Estatuto del Tribunal de Justicia serán aplicables a los tribunales especializados.

Comentario

El artículo 225 A actual prevé que, en lo que respecta al acto por el que se crea un tribunal especializado, el Consejo decidirá por unanimidad, previo dictamen del Parlamento Europeo y de la Comisión (cuando la propuesta haya sido hecha por el Tribunal de Justicia). El Círculo de debate ha recomendado que el Consejo decida por mayoría cualificada. Igualmente, una mayoría estima que debería ser de aplicación el procedimiento legislativo. De ahí que el Círculo haya considerado que el acto por el que se crea un tribunal y se establecen sus competencias posee un carácter legislativo. El Praesidium ha decidido seguir la recomendación del Círculo de debate.

Artículo 226

(Artículo actual: sin modificación)

Si la Comisión estimare que un Estado miembro ha incumplido una de las obligaciones que le incumben en virtud de la Constitución, emitirá un dictamen motivado al respecto, después de haber ofrecido a dicho Estado la posibilidad de presentar sus observaciones.

Si el Estado de que se trate no se atuviere a este dictamen en el plazo determinado por la Comisión, ésta podrá recurrir al Tribunal de Justicia.

Comentario

Reproducción del artículo 226 en su versión actual. Un miembro del Círculo de debate sobre el Tribunal de Justicia ha abogado por sustituir esta disposición por otra en la que se recoja el artículo 88 del Tratado CECA. Dicha disposición permitiría a la Comisión declarar el incumplimiento por un Estado miembro de una de las obligaciones que le incumben en virtud de la Constitución. No obstante, la gran mayoría de los miembros del círculo se ha mostrado partidaria de mantener la disposición existente.

Artículo 227

(Artículo actual: sin modificación)

Cualquier Estado miembro podrá recurrir al Tribunal de Justicia, si estimare que otro Estado miembro ha incumplido una de las obligaciones que le incumben en virtud de la Constitución.

Antes de que un Estado miembro interponga, contra otro Estado miembro, un recurso fundado en un supuesto incumplimiento de las obligaciones que le incumben en virtud de la Constitución, deberá someter el asunto a la Comisión.

La Comisión emitirá un dictamen motivado, una vez que los Estados interesados hayan tenido la posibilidad de formular sus observaciones por escrito y oralmente en procedimiento contradictorio.

Si la Comisión no hubiere emitido el dictamen en el plazo de tres meses desde la fecha de la solicitud, la falta de dictamen no será obstáculo para poder recurrir al Tribunal de Justicia.

Artículo 228

1. Si el Tribunal de Justicia declarare que un Estado miembro ha incumplido una de las obligaciones que le incumben en virtud de la Constitución, dicho Estado estará obligado a adoptar las disposiciones necesarias para la ejecución de la sentencia del Tribunal de Justicia.
2. **Si la Comisión estimare que el Estado miembro afectado no ha adoptado las medidas necesarias para la ejecución de la sentencia del Tribunal, podrá someter el asunto al Tribunal de Justicia, después de haber ofrecido a dicho Estado la posibilidad de presentar sus observaciones.** La Comisión indicará el importe que considere adecuado a las circunstancias para la suma a tanto alzado o la multa coercitiva que deba ser pagada por el Estado miembro afectado.

Si el Tribunal de Justicia declarare que el Estado miembro afectado ha incumplido su sentencia, podrá imponerle el pago de una suma a tanto alzado o de una multa coercitiva.

Este procedimiento se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 227.

3. **En caso de que la Comisión presentare un recurso ante el Tribunal de Justicia en virtud del artículo 226 por considerar que el Estado afectado ha incumplido la obligación de informar sobre las medidas de incorporación de una ley marco, podrá, si lo considera oportuno, pedir al Tribunal de Justicia, en el propio recurso, que imponga el pago de una suma a tanto alzado o de una multa coercitiva si estimare que ha existido incumplimiento. Si el Tribunal de Justicia accediere a la petición de la Comisión, el pago deberá efectuarse en el plazo fijado por el Tribunal de Justicia en la sentencia.**

Comentario

Por lo que respecta al mecanismo de sanciones en caso de inejecución de una sentencia del Tribunal, en el informe final del Círculo de debate se pone de manifiesto que el sistema actual no es lo suficientemente eficaz puesto que pueden llegar a transcurrir años antes de que se imponga una sanción económica a los Estados condenados por el Tribunal. El círculo considera, por tanto, que sería conveniente tratar de conseguir una mayor eficacia y sencillez en los mecanismos de sanciones por no ejecución de las sentencias del Tribunal. A tal efecto, se ha propuesto fortalecer el mecanismo de sanciones previsto en el artículo 228 del TCE suprimiendo las dos fases previas al recurso al Tribunal para la aplicación de sanciones, a saber: la fase de "advertencia" al Estado y la fase del "dictamen motivado" de la Comisión, o una de ellas por lo menos ¹; una amplia mayoría se ha mostrado partidaria de esta última propuesta.

El texto del artículo propone simplificar el procedimiento preliminar suprimiendo el dictamen motivado.

¹ El recurso directo al Tribunal por la Comisión o por un Estado miembro no supone una novedad; el Tratado lo prevé ya en algunos casos como, por ejemplo, cuando un Estado abusa de las excepciones previstas por motivos de defensa o en casos de crisis (artículo 298) ¹.

Además, se ha propuesto dentro del Círculo que las sanciones previstas en el artículo 228 podrían entrar en vigor de manera retroactiva (a partir del inicio de la infracción). No obstante, no parece necesaria una disposición a tal efecto, puesto que el texto actual ya prevé la posibilidad de imponer no solamente una multa coercitiva (por día de incumplimiento a partir de la fecha en que se dicte la sentencia), sino también el pago de una suma a tanto alzado (establecida en función de la gravedad del incumplimiento antes de la fecha en que se dicte la sentencia).

El apartado 3 (nuevo) es el resultado de una propuesta presentada al Círculo de debate por la Comisión. Tiene por objeto dar a la Comisión la posibilidad de presentar un recurso ante el Tribunal al mismo tiempo (en el mismo procedimiento) que un recurso en virtud del artículo 226 del TCE y una petición de imposición de una sanción. Si, a petición de la Comisión, el Tribunal impone la sanción en la propia sentencia condenatoria, dicha sanción se aplicaría tras un plazo determinado, a partir del momento en que se dictó la sentencia, si el Estado demandado no se atuviera a la condena. La mayoría de los miembros del Círculo se ha pronunciado a favor de esta propuesta. Este dispositivo permitiría agilizar y acelerar considerablemente el procedimiento en lo que respecta a las sanciones relativas a los casos de "no comunicación" de una medida nacional de incorporación¹. El Preasidium ha decidido adoptar esta recomendación del Círculo de debate.

Artículo 229

Las leyes europeas, las leyes marco europeas y las leyes o los reglamentos del Consejo adoptados en virtud de la Constitución podrán atribuir al Tribunal de Justicia una competencia jurisdiccional plena para las sanciones que prevean.

Comentario

Este artículo se ha modificado únicamente para tomar en consideración los nuevos instrumentos de la Parte I.

¹ En la práctica se distingue entre estos casos de "no comunicación" (cuando el Estado miembro no ha adoptado ninguna medida de transposición) de los casos de transposición incorrecta (cuando, en opinión de la Comisión, las medidas de transposición adoptadas por el Estado miembro no se ajustan a la Directiva (o a la ley marco)). El articulado propuesto no se aplicaría al segundo caso.

Artículo 229 A

Sin perjuicio de las restantes disposiciones de la Constitución, **una ley europea** atribuirá al Tribunal de Justicia, en la medida que aquélla determine, la competencia para resolver litigios relativos a la aplicación de los actos adoptados sobre la base de la Constitución por los que se crean títulos de propiedad industrial.

Comentario

Durante los trabajos del Círculo se puso de manifiesto la marcada voluntad de hacer más sencilla la utilización de esta base jurídica. Para ello, el Círculo recomendó que se sustituyera el procedimiento actual (decisión del Consejo por unanimidad + ratificación por los Estados miembros) suprimiendo la exigencia de ratificación por los Estados miembros, introduciendo la mayoría cualificada para la decisión del Consejo y, en opinión de una mayoría del Círculo, estableciendo el procedimiento legislativo. El Praesidium ha decidido seguir la recomendación del Círculo.

Artículo 230

1. El Tribunal de Justicia controlará la legalidad de **las leyes europeas y las leyes marco europeas**, de los actos del Consejo, de la Comisión y del BCE que no sean recomendaciones o dictámenes y de los actos del Parlamento Europeo destinados a producir efectos jurídicos frente a terceros. **Controlará también la legalidad de los actos de las agencias y organismos de la Unión que produzcan efectos jurídicos frente a terceros.**
2. A tal fin, será competente para pronunciarse sobre los recursos por incompetencia, vicios sustanciales de forma, violación de la Constitución o de cualquier norma jurídica relativa a su ejecución, o desviación de poder, interpuestos por un Estado miembro, el Parlamento Europeo, el Consejo o la Comisión.

3. El Tribunal de Justicia será competente en las mismas condiciones para pronunciarse sobre los recursos interpuestos por el Tribunal de Cuentas, el Banco Central Europeo y **el Comité de las Regiones**, con el fin de salvaguardar prerrogativas de éstos.
4. Toda persona física o jurídica podrá interponer, en las mismas condiciones, recurso contra **los actos de los que sea destinataria o que le afecten directa e individualmente y contra los actos reglamentarios que le afecten directamente sin medidas de ejecución.**
5. **Los actos por los que se crean los organismos y agencias de la Unión podrán prever condiciones y procedimientos específicos para los recursos presentados por personas físicas o jurídicas contra actos de dichos organismos o agencias destinados a producir efectos jurídicos.**
6. Los recursos previstos en el presente artículo deberán interponerse en el plazo de dos meses a partir, según los casos, de la publicación del acto, de su notificación al recurrente o, a falta de ello, desde el día en que éste haya tenido conocimiento del mismo.

Comentario

Apartado 1

Esta disposición ha sido la que se ha debatido más extensamente en el Círculo de debate. El párrafo primero contiene una modificación importante, puesto que incluye los actos de las agencias y organismos de la Unión. Tras analizar detalladamente la situación actual de los organismos y agencias en lo referente al control de la legalidad de sus actos, el Círculo ha comprobado que en general los actos por los que se crean las agencias contienen disposiciones que establecen las vías de recurso ante el Tribunal de Justicia respecto de los actos jurídicos adoptados por ellas ¹.

¹ Véase a este respecto el documento de trabajo de la Secretaría relativo al derecho de recurso contra los actos de las agencias de la Unión (WD 9).

Los miembros del Círculo han considerado que los actos que produzcan efectos jurídicos frente a terceros no deberían escapar al control de la legalidad y, por consiguiente, la mayoría de los miembros recomienda que el artículo 230 CE sea modificado con el fin de incluir, además de los actos jurídicos adoptados por las instituciones, los actos de los organismos y agencias de la Unión. Se ha señalado que en los actos por los que se crean las agencias podrían precisarse también los procedimientos específicos para el ejercicio del control de la agencia u organismo (véase el nuevo apartado 5). Un único miembro del Círculo ha declarado que no podía sumarse a la recomendación general del Círculo sobre este punto.

Por otra parte, se subrayó que esta orientación del Círculo se refería exclusivamente a los organismos y agencias contemplados en el Tratado CE, y que los que operan en el ámbito de la PESC y de la cooperación policial y judicial en materia penal deben examinarse en las disposiciones de las respectivas políticas, ya que es posible que presenten ciertas particularidades que podrían regularse en los actos por los que se creen dichos organismos o agencias (en cualquier caso, en la medida en que la Constitución contuviera una exclusión de competencia del Tribunal respecto de la PESC, los organismos PESC no estarían cubiertos por el presente artículo).¹

Apartado 2

Sin modificaciones.

Apartado 3

El Praesidium propone, en respuesta a las solicitudes de miembros de la Convención, introducir el Comité de las Regiones, que podría tener una legitimidad activa para salvaguardar sus prerrogativas.

¹ Sin embargo, por lo que respecta a la Agencia Europea de Armamento y de Investigación Estratégica prevista en el apartado 3 del artículo 30 de la Parte I, convendría que en la decisión del Consejo por la que se establezca el régimen de funcionamiento de la Agencia se prevea la competencia del Tribunal de Justicia respecto de los actos de ésta que produzcan efectos jurídicos frente a personas físicas o jurídicas.

Apartado 4

El Círculo de debate trató largamente la cuestión del acceso de las personas físicas o jurídicas al Tribunal de Justicia en relación con actos de alcance general. De hecho, el Círculo estaba dividido en dos grupos: para algunos no debe modificarse en cuanto al fondo el párrafo cuarto del artículo 230 ya que satisface las exigencias esenciales de una tutela judicial efectiva, en particular debido a la acción de los órganos jurisdicciones nacionales, que pueden (o deben) someter al Tribunal de Justicia toda cuestión prejudicial encaminada a la interpretación o a la apreciación de la validez del Derecho de la Unión; para otros miembros, esta disposición contiene condiciones de admisibilidad demasiado restrictivas para los recursos de los particulares contra actos de alcance general.

Los miembros del Círculo favorables a una modificación del párrafo cuarto del artículo 230 hicieron especial hincapié en que, en determinados casos excepcionales, un particular podría verse afectado directamente por un acto de alcance general que no conllevara una medida de ejecución interna. En tal caso, actualmente estaría obligado a infringir esa norma para tener derecho de recurso. Consideran que las condiciones actuales de admisibilidad, que exigen que una persona esté afectada "directa e individualmente", no permiten el control por el Tribunal de Justicia en este supuesto concreto. Con esta idea, el Praesidium recomienda una apertura de las condiciones de interposición de recursos directos.

Los miembros del Círculo favorables a una modificación del párrafo cuarto del artículo 230 prefieren la opción que menciona los "actos de alcance general". No obstante, determinados miembros consideraron más adecuado elegir la formulación "actos reglamentarios", lo que permite establecer una distinción entre los actos legislativos y los actos reglamentarios, manteniendo un enfoque restrictivo en lo referente a los recursos de los particulares contra los actos legislativos (para los que la condición de afectado "directa e individualmente" sigue siendo de aplicación) y prever un enfoque más abierto respecto de los recursos contra los actos reglamentarios. El Praesidium ha adoptado esta última opción y propone establecer que las personas físicas o jurídicas puedan interponer recursos contra los actos reglamentarios que les afecten directamente sin medidas de ejecución.

También se ha propuesto una simplificación de la redacción del párrafo cuarto del artículo 230 consistente en suprimir la fórmula "aunque revistan la forma de ..." sustituyéndola por "los actos de los que sea destinataria o que le afecten directa e individualmente".

En el transcurso de sus deliberaciones el Praesidium ha tomado nota asimismo de una propuesta perfilada por algunos miembros de la Convención de incluir en este artículo un recurso específico para la defensa de los derechos fundamentales, pero ha decidido, como el Círculo, no adoptar esta idea.

Apartado 5

Véase el comentario sobre el apartado 1, más arriba.

Apartado 6

En este apartado figura el plazo aplicable para la interposición de recursos de anulación. Podría preverse remitir esta disposición al Estatuto del Tribunal de Justicia.

Artículo 230 bis

El Estado miembro afectado por una constatación del Consejo Europeo o del Consejo en virtud del artículo 45 podrá recurrir al Tribunal de Justicia en el plazo de un mes a partir de la fecha de dicha constatación, por violación de las disposiciones exclusivamente procedimentales contenidas en dicha disposición.

Comentario

Este artículo recoge el contenido de la letra e) del artículo 46 del TUE, que se refiere al procedimiento del artículo 7 del TUE, y del artículo 45 de la Parte I de la Constitución, modificando su formulación. Parece indicado que esta disposición figure en la Parte II de la Constitución.

Artículo 231

(Artículo actual: sin modificación)

Si el recurso fuere fundado, el Tribunal de Justicia declarará nulo y sin valor ni efecto alguno el acto impugnado.

Sin embargo, señalará, si lo estima necesario, aquellos efectos del **acto**¹ declarado nulo que deban ser considerados como definitivos.

Artículo 232

En caso de que, en violación de la Constitución, el Parlamento Europeo, el Consejo o la Comisión se abstuvieren de pronunciarse, los Estados miembros y las demás instituciones de la Unión podrán recurrir al Tribunal de Justicia con objeto de que declare dicha violación. **Esta disposición se aplicará, en las mismas condiciones, a las agencias y organismos de la Unión que se abstengan de pronunciarse.**

Este recurso solamente será admisible si la institución, **agencia u organismo** de que se trate hubiere sido requerida previamente para que actúe. Si, transcurrido un plazo de dos meses a partir de dicho requerimiento, la institución, **agencia u organismo** no hubiere definido su posición, el recurso podrá ser interpuesto dentro de un nuevo plazo de dos meses.

Toda persona física o jurídica podrá recurrir en queja al Tribunal de Justicia, en las condiciones señaladas en los párrafos precedentes, por no haberle dirigido una de las instituciones, **agencias u organismos de la Unión** un acto distinto de una recomendación o de un dictamen.

¹ La sustitución del término "reglamento" por el de "acto" es una adaptación necesaria para que este párrafo sea conforme con la jurisprudencia por la cual el Tribunal de Justicia ha mantenido los efectos de actos distintos de los reglamentos.

Comentario

Esta disposición ha sido modificada y se han añadido los organismos y agencias de la Unión. En efecto, aun cuando el Círculo no ha abordado esta cuestión, parece que si éstos pueden ser objeto de un recurso de anulación, también se los podría cuestionar mediante un recurso por omisión, que tiene por objeto sancionar las omisiones contrarias a la Constitución. Puede suprimirse la referencia al BCE del Tratado actual, dado que está previsto que éste tenga estatuto de institución.

Artículo 233

La institución o instituciones, **la agencia u el organismo** de los que emane el acto anulado, o cuya abstención haya sido declarada contraria a la Constitución, estarán obligados a adoptar las medidas necesarias para la ejecución de la sentencia del Tribunal de Justicia.

Esta obligación se entiende sin perjuicio de la que pueda resultar de la aplicación del párrafo segundo del artículo 288.

Comentario

Este artículo se ha modificado para incluir también los organismos y agencias de la Unión. Además, el último párrafo de la antigua disposición decía lo siguiente: "El presente artículo se aplicará igualmente al BCE"; como éste pasa a ser una institución, el párrafo ya no tiene sentido.

Artículo 234

El Tribunal de Justicia será competente para pronunciarse, con carácter prejudicial:

- a) sobre la interpretación de la Constitución;

- b) sobre la validez e interpretación de los actos adoptados por las instituciones de la Unión;
- c) sobre la interpretación de los estatutos de las **agencias u organismos** creados por un acto de la Unión, cuando dichos estatutos así lo prevean.

Cuando se plantee una cuestión de esta naturaleza ante un órgano jurisdiccional de uno de los Estados miembros, dicho órgano podrá pedir al Tribunal de Justicia que se pronuncie sobre la misma, si estima necesaria una decisión al respecto para poder emitir su fallo.

Cuando se plantee una cuestión de este tipo en un asunto pendiente ante un órgano jurisdiccional nacional cuyas decisiones no sean susceptibles de ulterior recurso judicial de Derecho interno, dicho órgano estará obligado a someter la cuestión al Tribunal de Justicia.

Cuando se plantee una cuestión de este tipo en un asunto pendiente ante un órgano jurisdiccional nacional en relación con una persona privada de libertad, el Tribunal de Justicia se pronunciará con la máxima brevedad.

Comentario

Se propone mantener esta disposición, que desempeña un papel fundamental ya que establece un control descentralizado del Derecho de la Unión y una cooperación entre los órganos jurisdiccionales nacionales y el Tribunal de Justicia, prácticamente sin cambios –salvo por la posibilidad de suprimir la referencia al BCE.

Por lo demás, durante el examen de los proyectos de artículos del ámbito JAI, un miembro de la Convención presentó una enmienda que preveía que el Tribunal de Justicia debería pronunciarse en un plazo máximo de tres meses cuando el procedimiento nacional se refiriera a una persona privada de libertad. Es cierto que el procedimiento prejudicial tiene efecto suspensivo del procedimiento nacional, lo que resulta especialmente importante si este último se refiere a una

persona privada de libertad. El Praesidium ha estimado conveniente adoptar esta idea, que aparece como último párrafo, sustituyendo el plazo de tres meses por "con la máxima brevedad". Obsérvese que el Tribunal puede ya recurrir a "procedimientos acelerados" en determinados casos, "cuando la urgencia particular del asunto exija que el Tribunal resuelva sin dilación" (véase el artículo 62 bis del Reglamento de procedimiento del Tribunal de Justicia). Por otra parte, se podría fijar un plazo para este tipo de procedimientos prejudicial, si bien el Praesidium ha considerado que, llegado el caso, dicho plazo podría quedar previsto en el Estatuto del Tribunal de Justicia.

Artículo 235

(Artículo actual: sin modificación)

El Tribunal de Justicia será competente para conocer de los litigios relativos a la indemnización por daños a que se refiere el segundo párrafo del artículo 288.

Artículo 236

(Artículo actual: sin modificación)

El Tribunal de Justicia será competente para pronunciarse sobre cualquier litigio entre la Unión y sus agentes dentro de los límites y en las condiciones que establezca su estatuto o que resulten del régimen que les sea aplicable.

Artículo 237

(Artículo actual: sin modificación)

El Tribunal de Justicia será competente, dentro de los límites que a continuación se señalan, para conocer de los litigios relativos:

- a) al cumplimiento de las obligaciones de los Estados miembros que se derivan de los Estatutos del Banco Europeo de Inversiones. El Consejo de Administración del Banco tendrá, a este respecto, las competencias que [el artículo 226] atribuye a la Comisión;

- b) a los acuerdos del Consejo de Gobernadores del Banco. Cualquier Estado miembro, la Comisión y el Consejo de Administración del Banco podrán interponer recurso en esta materia, en las condiciones previstas en [el artículo 230];
- c) a los acuerdos del Consejo de Administración del Banco. Sólo podrán interponer recurso contra tales acuerdos los Estados miembros o la Comisión, en las condiciones establecidas en [el artículo 230] y únicamente por vicio de forma en el procedimiento previsto en los apartados 2, 5, 6 y 7 del artículo 21 de los Estatutos del Banco;
- d) al cumplimiento por parte de los bancos centrales nacionales de las obligaciones que se derivan de la Constitución y de los Estatutos del SEBC. El Consejo del BCE dispondrá a este respecto, frente a los bancos centrales nacionales, de los poderes que [el artículo 226] reconoce a la Comisión respecto de los Estados miembros. Si el Tribunal de Justicia declarare que un banco central nacional ha incumplido una de las obligaciones que le incumben en virtud de la Constitución, dicho banco estará obligado a adoptar las medidas necesarias para la ejecución de la sentencia del Tribunal de Justicia.

Artículo 238

(Artículo actual: sin modificación)

El Tribunal de Justicia será competente para juzgar en virtud de una cláusula compromisoria contenida en un contrato de Derecho público o de Derecho privado celebrado por la Unión o por su cuenta.

Artículo 239

(Artículo actual: sin modificación)

El Tribunal de Justicia será competente para pronunciarse sobre cualquier controversia entre Estados miembros relacionada con el objeto de la Constitución, si dicha controversia le es sometida en virtud de un compromiso.

Artículo 240
(Artículo actual: sin modificación)

Sin perjuicio de las competencias que la Constitución atribuye al Tribunal de Justicia, los litigios en los que la Unión sea parte no podrán ser, por tal motivo, sustraídos a la competencia de las jurisdicciones nacionales.

Artículo 240 bis

El Tribunal de Justicia no será competente para pronunciarse respecto de los artículos 29 y 30 de la Parte I y de las disposiciones del capítulo I de la Parte II relativas a la política exterior y de seguridad común.

Comentario

El Círculo de debate sobre el Tribunal de Justicia se mostró dividido sobre la cuestión de la competencia del Tribunal en el ámbito de la PESC. Por consiguiente, resulta difícil presentar una posición consensuada. El presente proyecto de artículo, que refleja la situación actual, se ha formulado teniendo en cuenta las consideraciones que se exponen a continuación.

Actualmente, cuando una acción del ámbito de la PESC prevé sanciones económicas aplicables a un tercer país, se requieren medidas de aplicación en el plano de la Comunidad, que se adoptan tomando como base los artículos 60 y 301 CE. Cuando se trata de sanciones económicas contra particulares se recurre al artículo 308 CE¹. El Tribunal ejerce ya el control jurisdiccional de todos los actos de ejecución de conformidad con el Tratado CE. El Praesidium, al tiempo que mantiene la situación actual, ha considerado necesario prever expresamente la posibilidad de adoptar sanciones económicas contra particulares en el artículo 31 del capítulo 4 del Título B (De la acción exterior). En los casos previstos en esa disposición, el Tribunal ejerce un control jurisdiccional. Por lo que atañe a las sanciones (medidas restrictivas), cabría plantear la cuestión

¹ Sin embargo, el Consejo ha interpretado los artículos 60 y 301 de manera amplia, utilizándolos como base jurídica para adoptar sanciones contra personas o entidades que ejercen de hecho el control de un país o de parte de un país.

de si la Convención considera adecuado –o no– ampliar la posibilidad de recursos de particulares contra actos adoptados con base en decisiones PESC que afecten a personas de modos distintos del económico (p.ej. las medidas restrictivas en aplicación de decisiones PESC pueden tener por objeto la prohibición de entrada y de libre circulación de personas, como es el caso de la denegación de visado). La cuestión de una base jurídica específica para las sanciones de carácter no económico contra particulares deberá estudiarse en el marco del debate de la Convención sobre el artículo 31 de la Parte II, relativo a la acción exterior, y no en el de las disposiciones relativas al Tribunal de Justicia.

Una cuestión que se ha planteado se refiere a la posibilidad de un recurso de anulación fundado en el artículo 230 CE, interpuesto por Estados o instituciones, contra actos PESC que se hayan adoptado en violación de las formas sustanciales previstas en la Constitución. El Praesidium no ha seguido esta vía. Sin embargo, el Praesidium considera que deberá reconocerse la competencia del Tribunal para examinar la compatibilidad de los acuerdos internacionales previstos que se sitúan en el marco de la PESC con las disposiciones de la Constitución (actual apartado 6 del artículo 300).

Asimismo, el Praesidium ha examinado la recomendación del Círculo, según la cual "Como consecuencia de la supresión de los pilares, la Constitución debería mantener el principio consagrado en el artículo 47 del TUE, en virtud del cual el Tribunal de Justicia es competente para controlar que las medidas y los procedimientos PESC no se inmiscuyan en los procedimientos aplicables a otras políticas (derivadas del antiguo primer pilar) de la Constitución, con el fin de que estas últimas puedan conservarse."¹ Partiendo del hecho de que se han suprimido los pilares, pero que la parte III de la Constitución define los procedimientos aplicables para cada ámbito, el Praesidium considera que el artículo 230 permite al Tribunal de Justicia ejercer un control de la legalidad. Efectivamente cuando una institución se basa incorrectamente en una base jurídica incluida en el capítulo de PESC para adoptar un acto que habría debido fundar en una base jurídica incluida en otra disposición (no PESC) de la Constitución, dicha institución viola la Constitución, ya que se dotaría al acto en cuestión de una base jurídica errónea.

¹ Círculo de debate sobre el Tribunal de Justicia - Informe complementario sobre la cuestión del control judicial de la política exterior y de seguridad común (CONV 689/03, REV 1, letra b) del apartado 7).

Artículo 240 ter

En el ejercicio de sus competencias relativas a las disposiciones de los capítulos 3 y 4 del Título [...] relativas al espacio de libertad, seguridad y justicia, el Tribunal de Justicia no será competente para controlar la validez o proporcionalidad de operaciones efectuadas por la policía u otros servicios con funciones coercitivas de un Estado miembro, ni sobre el ejercicio de las responsabilidades que incumben a los Estados miembros respecto al mantenimiento del orden público y la salvaguardia de la seguridad interior, **cuando dichos actos estén regulados por el Derecho interno.**

Comentario

Este artículo se basa en el apartado 5 del artículo 35 del TUE actual, con excepción de las nueve últimas palabras. Corresponde al artículo 9 del conjunto de artículos sobre JAI aprobados por el Praesidium. Sobre este texto se presentaron muchas enmiendas que abogaban por su supresión, pero al mismo tiempo otros miembros pidieron que se recogiera lisa y llanamente el texto del apartado 5 del artículo 35 del TUE. Cabe estimar, pues, que este artículo en la versión que se presenta constituye una solución transaccional aceptable. Ahora bien, parece más adecuado incluir esta disposición entre los artículos relativos al Tribunal que en el capítulo consagrado al espacio de libertad, seguridad y justicia.

Artículo 240 quater

Los Estados miembros se comprometen a no someter las controversias relativas a la interpretación o aplicación de la Constitución a un procedimiento de solución distinto de los previstos en ella.

Comentario

El presente artículo recoge el texto del artículo 292 CE, que parece encajar mejor en las disposiciones de la Parte II relativa al Tribunal de Justicia.

Artículo 241

Aunque haya expirado el plazo previsto en el quinto párrafo del artículo 230, cualquiera de las partes de un litigio en el que se cuestione **una ley europea, una ley** o un reglamento del Consejo, de la Comisión o del BCE podrá acudir al Tribunal de Justicia, alegando la inaplicabilidad de dicho acto por los motivos previstos en el segundo párrafo del artículo 230.

Comentario

Este artículo sólo se ha modificado para tener en cuenta la nueva designación de los instrumentos.

Artículo 242

(Artículo actual: sin modificación)

Los recursos interpuestos ante el Tribunal de Justicia no tendrán efecto suspensivo. Sin embargo, el Tribunal de Justicia podrá, si estima que las circunstancias así lo exigen, ordenar la suspensión de la ejecución del acto impugnado.

Artículo 243

(Artículo actual: sin modificación)

El Tribunal de Justicia podrá ordenar las medidas provisionales necesarias en los asuntos de que esté conociendo.

Artículo 244

(Artículo actual: sin modificación)

Las sentencias del Tribunal de Justicia tendrán fuerza ejecutiva en las condiciones que establece [el artículo 256].

El Estatuto del Tribunal de Justicia se fijará en un protocolo independiente.

Por ley se podrán modificar las disposiciones del Estatuto, con excepción de su título I y de su artículo 64. El Parlamento Europeo y el Consejo decidirán a petición del Tribunal de Justicia y previa consulta a la Comisión, o a petición de la Comisión y previa consulta al Tribunal de Justicia.

Comentario

Una mayoría dentro del Círculo recomienda que el Estatuto del Tribunal de Justicia se adopte por el procedimiento legislativo, excepto su Título I, que trata en particular del régimen de inmunidad de los jueces y abogados generales, y su artículo 64, relativo al régimen lingüístico. El Praesidium ha decidido adoptar esta recomendación del Círculo.
